

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACIÓN - SENTENCIA	
DEMANDANTE	EMILSE DEL SOCORRO COLORADO QUIROZ
DEMANDADO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES y OTROS.
RADICADO	05001-31-05-022-2016-01241-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Pensión de invalidez
DECISIÓN	Revoca y condena.

Medellín, veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

Estudiado, discutido, y aprobado en Sala virtual.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”; y surtido el traslado a las partes en los términos reglados, procede la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por la señora **EMILSE DEL SOCORRO COLORADO QUIROZ** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** y las **JUNTAS REGIONAL y NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ**.

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 017**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ANTECEDENTES

Es materia de la Litis, decidir el recurso de apelación invocado por el apoderado judicial de la parte demandante, contra la sentencia que profirió el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín - Antioquia, en la audiencia pública celebrada el día 9 de septiembre de 2019, dentro del proceso referenciado.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que la señora EMILSE DEL SOCORRO COLORADO QUIROZ, se encuentra afiliada al régimen de prima media con prestación definida administrado por COLPENSIONES, entidad que mediante dictamen del 12 de febrero de 2014 calificó la pérdida de capacidad laboral de la demandante en un 43,66% derivada de una enfermedad de origen común, y con fecha de estructuración del 9 de diciembre de 2013.

Al no estar de acuerdo con la calificación, la actora interpone el recurso de reposición, dando lugar a la expedición de un nuevo dictamen de pérdida de capacidad laboral por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, que data del 10 de agosto de 2014, en el que se dictaminó una PCL del 46,51% derivada de enfermedad común y con fecha de estructuración del 27 de junio de 2014, calificación que luego fue confirmada por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez mediante dictamen del 29 de enero de 2015.

Que encontrándose inconforme con estas calificaciones y debido al deterioro progresivo del estado de salud, la actora se hizo calificar por la IPS Universitaria de la Universidad de Antioquia, quien mediante dictamen del 1° de agosto de 2016, determinó que la demandante presenta una pérdida de la capacidad laboral del 55,72%, catalogada como enfermedad común, y con fecha de estructuración del 12 de agosto de 2014.

Señala el escrito introductorio que, al contar el demandante con el porcentaje mínimo de pérdida de capacidad laboral, y tener en su haber más de 50 semanas cotizadas en los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de

estructuración del estado de invalidez, o 26 semanas en cualquier tiempo en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, elevó solicitud pensional ante COLPENSIONES el día 13 de octubre de 2016, sin haber obtenido respuesta a la fecha de presentación de la demanda.

III. – PRETENSIONES

La acción judicial está dirigida a que se deje sin efectos los dictámenes de pérdida de capacidad laboral proferidos por medicina laboral de Colpensiones y las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez, y en su lugar se acoja el dictamen elaborado por la IPS UNIVERSITARIA, en consecuencia, se CONDENE a COLPENSIONES a reconocer y pagar a la señora, EMILSE DEL SOCORRO COLORADO QUIROZ una pensión de invalidez de origen común, en forma retroactiva a partir del 12 de agosto de 2014, junto con las mesadas adicionales, los intereses moratorios del art. 141 de la ley 100 de 1993, la indexación de las condenas, lo que ultra y extra petita resulte acreditado en el proceso, y las costas.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

Admitida la demanda y corrido el traslado correspondiente, las codemandadas la contestaron oportunamente en los siguientes términos:

COLPENSIONES (fls. 108 al 116) a través de su apoderada judicial manifestó que son ciertas las calificaciones de pérdida de capacidad laboral realizadas a la demandante incluida aquella proveniente de la IPS Universitaria, no obstante, señala que esta última entidad carece de competencia para calificar el estado de invalidez de una persona, conforme lo establecido en el art. 41 de la Ley 100 de 1993, Maxime que dicho dictamen ni siquiera ha sido puesto en conocimiento de Colpensiones, para su eventual contradicción, sin que le consten los restantes supuestos fácticos, los cuales deberán ser objeto de debate probatorio en la litis; se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones formuladas, proponiendo en su defensa las excepciones de mérito que denominó: *“falta de causa para demandar; inexistencia de la obligación de reconocer y pagar los intereses de mora; improcedencia de la*

indexación de las condenas; prescripción; compensación; buena fe; imposibilidad de condena en costas; y la excepción genérica”

A su turno, la **JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA** (fls.131 al 136): a través de su apoderado judicial manifestó que son ciertas las calificaciones de pérdida de capacidad laboral realizadas a la demandante por parte de medicina laboral de COLPENSIONES, y las juntas regional y nacional de calificación de invalidez, sin que le consten los restantes supuestos fácticos, siendo algunos de ellos simples apreciaciones personales que realiza la parte activa; se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones formuladas, proponiendo en su defensa la excepción de mérito que denominó: *“inexistencia de fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones”*.

Finalmente, la **JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA**, dio respuesta a fls. 181 al 199: indicando a través de su apoderado judicial que son ciertos los hechos relacionados con las calificaciones de pérdida de capacidad laboral realizadas a la demandante por parte de medicina laboral de COLPENSIONES y las juntas regional y nacional de calificación de invalidez, sin que le consten los restantes supuestos fácticos, siendo algunos de ellos simples apreciaciones personales que realiza la parte activa, advirtiendo frente al dictamen particular allegado con la demanda, que este no corresponde a una verdadera calificación de pérdida de capacidad laboral, pues carece de efecto jurídico y fuerza vinculante, en razón a que no cuenta siquiera con los criterios mínimos establecidos por el legislador para la asignación de un porcentaje de pérdida de capacidad laboral contenidos en el manual único de calificación de invalidez; se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones formuladas, proponiendo en su defensa las excepciones de mérito que denominó: *“legalidad de la calificación expedida por la junta nacional de calificación de invalidez; la variación de la condición clínica del paciente con posterioridad al dictamen de la junta nacional exime de responsabilidad a la entidad; improcedencia del petitum: inexistencia de prueba idónea para controvertir el dictamen – carga de la prueba a cargo del contradictor; improcedencia de las pretensiones respecto al dictamen de la junta*

nacional de calificación de invalidez - competencia del juez laboral; buena fe de la parte demandada; y la excepción genérica”.

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En el fallo objeto de apelación, el juez A Quo en audiencia pública de juzgamiento, celebrada el 9 de septiembre de 2019, DECLARÓ probadas las excepciones de “FALTA DE CAUSA PARA DEMANDAR”, e “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE RECONOCER Y PAGAR LOS INTERESES DE MORA” propuestas por COLPENSIONES, así como la excepción de “INEXISTENCIAS DE FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES” formulada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, y las de “LEGALIDAD DE LA CALIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ “, “INEXISTENCIA DE PRUEBA IDÓNEA PARA CONTROVERTIR EL DICTAMEN”, “IMPROCEDENCIA DE LAS PRETENSIONES RESPECTO A LA JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ” propuestas por la junta nacional. En consecuencia, ABSOLVIÓ a las codemandadas de todas las pretensiones y cargos formulados en su contra por la señora EMILSE DEL SOCORRO COLORADO QUIROZ, a quien le impuso las costas del proceso en la primera instancia, fijándole como agencias en derecho la suma equivalente a 1 SMLMV, para cada una de las codemandadas.

Como fundamento de su decisión, estimó el fallador de instancia que, si bien no se exige prueba solemne para la calificación de la pérdida de capacidad laboral de una persona, la prueba pericial que se allegue al plenario, si debe contar con unas exigencias mínimas para su procedencia, tal y como lo señala el art. 226 del Código General del Proceso, y en el presente evento, el dictamen elaborado por la IPS UNIVERSITARIA, no está acompañado de las calidades académicas de los médicos evaluadores, y tampoco cuenta con los soportes probatorios que llevaron a la conclusión de aumentar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral de la señora COLORADO QUIROZ.

La referida experticia, ni siquiera hace alusión al estado de salud en que se encontraba la demandante el día en que fue evaluada, como tampoco se

precisa en que aspectos difiere el nuevo dictamen de aquellos elaborados con anterioridad por las juntas médicas, cuál fue el manual único de calificación utilizado para la evaluación, e igualmente se omitieron los fundamentos de hecho y de derecho que debe contener el dictamen (fundamentación objetiva); falencias que a juicio del a quo, de manera alguna se entienden subsanadas con la sustentación del perito JOSÉ WILLIAM VARGAS ARENAS, y por ende debe concluirse, que la referida prueba pericial no aporta elementos de juicio convincentes, para concluir que la demandante presenta una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, para poder así acceder a la pensión de invalidez de origen común deprecada.

VI. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El apoderado judicial se opone a la absolución impartida, precisando para ello, que el juez de primer grado dentro de su análisis jurídico, desconoció el principio de primacía de la realidad sobre las formas, y el concepto de la invalidez como tal, pues una persona es considerada invalida cuando su pérdida de capacidad laboral, ya no le permite realizar una labor productiva, como ocurre con la demandante COLORADO QUIROZ.

Aduce en su alzada, que de conformidad con la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia, no existe tarifa legal probatoria en relación con los dictámenes de pérdida de capacidad laboral, lo cual permite acoger a plenitud el dictamen realizado por la IPS UNIVERSITARIA, pues contrario lo colegido por el fallador de instancia, esta institución si tuvo en cuenta las conclusiones de las juntas médicas, y la historia clínica de la demandante para elaborar su experticia.

Además, de las certificaciones allegadas por el perito en la audiencia, folios 236 y ss, se entienden satisfechas las exigencias formales establecidas en el art. 226 del Código General del Proceso, pues el referido perito clarificó que el método utilizado en la calificación de pérdida de capacidad laboral de la actora, no fue otro distinto que el del Decreto 917 de 1999, y que la demandante si fue evaluada previa calificación.

Expone este recurrente, que sustentación del perito no puede escindirse del propio dictamen, pues los dos son una misma prueba.

Que son evidentes los errores cometidos por las juntas médicas, pues la demandante requiere de un apoyo para la marcha, tal y como está documentado en la historia clínica, además tiene una ortesis tipo injerto como según consta a folios 77 del expediente.

Afirma que las juntas regional y nacional de calificación de invalidez, utilizaron indebidamente la clase funcional 2 contenida en la tabla 3.3 del Decreto 917 de 1999, asignándole a la actora un 17,4% de deficiencia, a sabiendas que la clase funcional 3 permite una calificación de hasta el 29% para aquellas personas que como la actora, utilizan ayudas para caminar, y así lo calificó la IPS UNIVERSITARIA, atendiendo a la situación real de la demandante, quien utiliza bastón y una ortesis tipo injerto.

Señala, que otro elemento que repercute en la calificación de la pérdida de capacidad laboral de la actora, es la indebida aplicación de tabla 12.4.5 del Decreto 917 de 1999, por parte de las juntas médicas, quienes al calificar las deficiencias, aplicaron la clase funcional 1 (leve), mientras que la IPS UNIVERSITARIA escoge la clase funcional 2 (moderada), lo anterior, con fundamento en la calificación psiquiátrica practicada a la demandante, donde se dice que esta presenta un diagnóstico depresivo moderado, el cual fue desconocido por el *A Quo*.

Y finalmente señala el recurrente, que el perito de la IPS UNIVERSITARIA evaluó a la demandante conforme a la historia clínica allegada el plenario, y que, al contar la actora con más de 50 semanas cotizadas, en los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración del estado de invalidez, le asiste derecho a la pensión de invalidez deprecada, debiéndose revocar la decisión de primer grado, y en su lugar acoger la totalidad de pretensiones formuladas.

Alegatos de conclusión.

Encontrándose dentro de la oportunidad procesal correspondiente, el apoderado judicial de COLPENSIONES, Dr. DEIVID ALEJANDRO OCHOA PALACIO portador de la T.P. 307.794 del C.S de la J, presentó sus alegatos de conclusión en segunda instancia, exponiendo básicamente que la sentencia de primer grado debe confirmarse, por cuanto la demandante agotó en debida forma la vía gubernativa, siguiendo el procedimiento legal para la calificación de la invalidez, y por consiguiente los dictámenes realizados durante este trámite cuentan con plena validez.

Estima que la prueba pericial presentada por la parte demandante y la sustentación del perito no brindan la suficiente carga probatoria que contenga claridad, especificidad o determinación que desvirtué la veracidad de los dictámenes presentados por las entidades demandadas y que hoy sustentan la negativa de conceder la prestación económica por invalidez, lo anterior, aunado al hecho de que la demandante tampoco reúne la densidad mínima de cotizaciones para causar este eventual derecho, en los términos del artículo 39 en la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 860 de 2003.

Al referido apoderado judicial se le reconoce personería para actuar en los términos del memorial de sustitución poder allegado al plenario.

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Naturaleza jurídica de la pretensión. – Pensión de invalidez: Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

Planteado el recurso de apelación tal y como se encuentra, los problemas jurídicos estriban en dilucidar: si la señora EMILSE DEL SOCORRO COLORADO QUIROZ logró o no, acreditar el cumplimiento de los requisitos legales para acceder al reconocimiento y pago de una pensión de invalidez, en

caso afirmativo, establecer la fecha de disfrute pensional, a cuánto asciende el retroactivo adeudado, y si estas mesadas pueden ser gravadas o no con los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, o en subsidio con la indexación de las condenas.

Pensión por invalidez.

El artículo 38 de la ley 100 de 1993 señala que se considera inválida la persona que, por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral.

El estado de invalidez es una condición física o mental que impide a la persona desarrollar una actividad laboral remunerada, debido a la considerable disminución de sus capacidades físicas y/o psíquicas e intelectuales, de manera tal que no le es dable suplir por sí mismo una vida digna, en resumen es la pérdida de las habilidades, destrezas, aptitudes y/o potencialidades de orden físico, mental y social que le permiten desempeñarse en una actividad u oficio habitual, según lo establecido en el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional.

De la calificación de la pérdida de capacidad laboral.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 52 de la Ley 962 de 2002 y adicionado por el artículo 18 de la Ley 1562 de 2012, el estado de invalidez de un afiliado al Sistema General de Pensiones debe establecerse mediante la valoración científica que efectúan entre otras, las Administradoras de Riesgos Laborales -ARL; y las Compañías de Seguros que asumen el riesgo de invalidez y muerte, las EPS, con base en el Manual Único para la Calificación de Invalidez, calificaciones que pueden ser objeto de discusión ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez, apelable ante la Junta de Calificación Nacional.

En síntesis, conforme el art 142 del Decreto 019 de 2012 adicionado por el art 18 de la Ley 1562 de 2012, el dictamen de calificación de la PCL debe ser realizado en primera oportunidad, por la AFP, ARL ó EPS a la que se encuentre afiliado el interesado y, de existir alguna controversia con la calificación, puede

interponer los respectivos recursos en los plazos señalados en la norma transcrita ante las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez.

Esta norma, a su vez, debe leerse concordada con los arts. 44 y 45 del Decreto 1352/13 por cuanto son las disposiciones que regulan cómo proceder cuando surtidas o agotadas las instancias de calificación previstas en la ley persisten controversias con los dictámenes emitidos por las referidas juntas de calificación de invalidez, el art 44 del Decreto 1352/13, a la letra reza:

“Artículo 44. Controversias sobre los dictámenes de las Juntas de Calificación de Invalidez. Las controversias que se susciten en relación con los dictámenes emitidos en firme por las Juntas de Calificación de Invalidez, serán dirimidas por la justicia laboral ordinaria de conformidad con lo previsto en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, mediante demanda promovida contra el dictamen de la junta correspondiente. (...)”

Significa lo anterior, que aquellas valoraciones que se emitan durante el trámite administrativo, son controvertibles ante la Jurisdicción del Trabajo y la Seguridad social, por lo que los dictámenes que profieren las entidades del sistema de seguridad social no son medios probatorios solemnes, y por ende el Juzgador en su valoración no está sometido a la tarifa legal de pruebas y puede formar libremente su convencimiento con aquellos elementos que le den mayor credibilidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 del CPT y la SS, en la medida en que la pérdida de la capacidad laboral y su origen pueden ser demostradas a través de los demás medios de prueba, que no exclusivamente con dicha probanza, así lo ha establecido la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, como puede apreciarse en las sentencia con radicación 26591 de 4 de abril de 2006, SL500-2013 SL9184-2016, SL3992-2019,SL4571-2019, y más recientemente la sentencia SL727-2021 del 22 de febrero de 2021, con radicación 77.899, en esta ultima se indicó lo siguiente:

“Lo anterior significó, dentro de la evolución de la jurisprudencia, que a pesar de la importancia y tecnicidad de la evaluación que realizan las autoridades médico laborales y las juntas de calificación de invalidez, tanto regionales como nacionales, estas pueden ser objeto de discusión en el proceso de seguridad social, al existir otros medios probatorios que ofrezcan un mayor grado de persuasión al juzgador, en punto

del grado o porcentaje de pérdida de capacidad laboral, la fecha de estructuración de la invalidez y su origen, lo cual debe estar enmarcado en las reglas de apreciación probatoria del artículo 61 del CPTSS.”

CASO CONCRETO

En el presente caso, debe recordarse que la pérdida de capacidad laboral de la demandante EMILSE DEL SOCORRO COLORADO QUIROZ ha sido calificada en cuatro (4) oportunidades así:

PRIMERA CALIFICACIÓN (fls.26 al 30)

Estuvo a cargo de la junta medica de COLPENSIONES de fecha 12 de febrero de 2014, en esta primigenia oportunidad, la administradora de pensiones le dictaminó a la actora, una PCL del 43.66%, calificando su origen como una enfermedad común, estructurada el día 9 de diciembre de 2013 (fecha de evaluación en la clínica del dolor), para su calificación se tuvo en cuenta el manual único de calificación de Invalidez - Decreto 917 de 1999, y como diagnostico o motivo de calificación, se consignó el de “GONARTROSIS NO ESPECIFICADA”, y “LUMBAGO CON CIÁTICA”.

El porcentaje de pérdida de capacidad laboral, salió de sumar los siguientes conceptos: deficiencia 19,76%, discapacidad 5,9%, minusvalía 18%.

SEGUNDA CALIFICACIÓN (Fls. 31 al 33)

Estuvo a cargo de la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, de fecha 30 de agosto de 2014, con fundamento en el manual único de calificación de invalidez contenido en el Decreto 917 de 1999, concluyendo la referida junta regional, que la actora presenta en realidad una PCL del 46,51%%, estructurada el **27 de junio de 2014** (fecha de concepto de psiquiatría), derivada de una enfermedad de origen común, con diagnostico o motivo de calificación de: “*LUMBAGO CON CIÁTICA*” y “*EPISODIO DEPRESIVO MODERADO*”.

El porcentaje de pérdida de capacidad laboral, salió de sumar los siguientes conceptos: deficiencia 22,86%, discapacidad 5,9%, y minusvalía 17,75%.

TERCERA CALIFICACIÓN (Fls. 37 al 40):

Al desatar el recurso de apelación presentado por la demandante, la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, en dictamen del 29 de enero de 2015, confirmó el origen de la enfermedad, el porcentaje de PCL, y la fecha de estructuración dictaminada por la junta regional, y como diagnostico o motivo de calificación, tuvieron en cuenta las siguientes patologías: *“GONARTROSIS CLASE II”*, *“LUMBAGO CON CIÁTICA”*, y *“EPISODIO DEPRESIVO MODERADO”*, esta calificación también tuvo como fundamento el manual único de calificación de invalidez – Decreto 917 de 1999.

CUARTA CALIFICACIÓN (Fls. 21 al 25):

Corresponde a un dictamen particular de fecha 22 de junio de 2012 realizado por la IPS UNIVERSITARIA de la Universidad de Antioquia, quien concluyó que la demandante presenta una pérdida de capacidad laboral del **55,72%** estructurada el 12 de agosto de 2014, derivada de una enfermedad de origen común, cuyo diagnóstico o motivo de calificación, correspondió a las patologías de: *“espondilopatias inflamatorias especificadas”*, *“coxartrosis primaria bilateral”*, y *“episodio depresivo moderado”*, esta evaluación también tuvo en cuenta, el MANUAL ÚNICO DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ - Decreto 917 de 1999.

El porcentaje de pérdida de capacidad laboral, salió de sumar los siguientes conceptos: deficiencia 33,92%, discapacidad 4,8%, y minusvalía 17%.

Para ahondar en las consideraciones técnico – científicas tenidas en cuenta para la elaboración de esta experticia, se hizo comparecer al proceso al médico evaluador en salud ocupacional, Dr. JOSÉ WILLIAM VARGAS ARENAS, adscrito de la IPS UNIVERSITARIA de la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, quien le relató al despacho lo siguiente:

Refirió haber tenido en cuenta las calificaciones realizadas por COLPENSIONES y las Juntas Regional y Nacional de Calificación de invalidez, y que la evaluación de la demandante se hizo conforme su historia clínica y al Manual Único de Calificación de invalidez contenido en el Decreto 917 de 1999.

Afirmó que la actora sufrió un trauma de rodilla, y como secuela de ello, quedo con una artrosis y deformidad de rodilla, además presenta otras patologías de columna que son de tipo degenerativo.

Que la artrosis padecida por la demandante, compromete su rodilla y columna, y por ello tal deficiencia fue calificada con fundamento en el capítulo 3 del Decreto 917 de 1999, que alude a las patologías reumatológicas, y en la tabla 3.3 del referido capítulo, estas pueden ser clasificadas en 4 clases, y la demandante está en la clase 3, que alude a las personas que pueden sostenerse de pie y caminar **sólo con aditamentos** (muletas o bastones) y en terreno llano. Pues la clase 2 acogida por las juntas médicas durante el trámite administrativo, solo aplica aquellas personas que pueden sostenerse de pie y caminar sólo en terreno llano, pero sin utilizar aditamentos para la marcha, que no es el caso de la demandante, quien necesariamente debe utilizar un bastón para caminar, conforme a la evaluación por fisioterapia obrante en su historia clínica.

Que aparte de la artrosis, la demandante también tiene una segunda deficiencia, consistente en un episodio o cuadro depresivo moderado que se califica con la tabla 12.4.5 del Decreto 917 de 1999, que regula los trastornos mayores del humor (afectivos) asociados o no con alteraciones menores del humor, y que dicha patología esta debidamente documentada en la historia clínica, pues existe una evaluación de psiquiatría en el año 2014, donde se diagnosticó a la actora con un trastorno depresivo moderado, deficiencia que se califica con la clase 2 que permite hasta un 20%, pues cuadro depresivo de la demandante está relacionado con su dolor de rodilla, por ende, ha sido de larga duración, superior a 6 meses.

Considera esta Sala, que en vista que lo plasmado en la calificación de pérdida de capacidad laboral realizada por la IPS UNIVERSITARIA, está debidamente soportado en la historia clínica de la señora COLORADO QUIROZ

visible a folios 47 al 96 del plenario, donde se observa, que efectivamente la actora si presenta dificultad en la marcha, derivada de una cojera e inestabilidad de su rodilla izquierda, misma que la obliga a utilizar muletas o bastón para sostenerse de pie y caminar, así se infiere de las la consultas médicas realizadas por la actora ante el INSTITUTO COLOMBIANO DEL DOLOR de fecha 9 de diciembre de 2013, donde se consignó que la demandante presenta *“marcha anormal y cojera por dolor”* (fls.54) y luego en la consulta realizada ante IPS JUAN LUIS LONDOÑO DE LA CUESTA en la fecha 19 de junio de 2013 el médico tratante consigno en las observaciones lo siguiente: *“MARCHA CON MULETAS. ARCOS DE MOVILIDAD DE 0 A 110 GRADOS-VALGO MODERADO. CON DOLOR A LA MOVILIZACIÓN”* (fls.75), en consulta realizada en la misma IPS el día 11 de julio de 2013, se consignó como observaciones lo siguiente: *“dificultad para la marcha camina ayudada de bastón rodilla izquierda con dolor a la movilización”* (fls.76), y finalmente en la consulta realizada por la actora en el CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN DEL SUR LTDA de fecha 27 de enero de 2014 (fls.77), la médica tratante Dra. Yalisma Andrea Giraldo García, consignó que la demandante continúa con dificultad en la marcha, debe continuar con terapia física, y debe utilizar una ortesis tipo inserto de calzado en plastazote con alza medial.

En vista de lo anterior, estima la Sala que, esta deficiencia que padece la demandante, efectivamente debía calificarse con el porcentaje de PCL establecido en la Clase N° III de la Tabla 3.3 del Capítulo III del Decreto 917 de 1999, que alude a las DEFICIENCIA GLOBAL DERIVADA DE ARTROSIS DE CADERAS, RODILLAS O AMBAS, y que permite una calificación del 17,5% al 29,9%.

Y frente a la deficiencia relacionada con los trastornos mayores del humor (afectivos) asociados o no con alteraciones menores del humor, es claro para la Sala, que la demandante presenta un diagnóstico de: *“TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR MODERADO”*, pues así fue calificado por el médico especialista en psiquiatría Dr. JULIO CESAR RESTREPO ISAZA en consulta de fecha 27 de junio de 2014 en la IPS Central Especialistas Laureles, obrante a folios 93 del plenario.

En consecuencia, al tratarse de un trastorno “MODERADO”, el mismo debía ser calificado con el porcentaje de PCL establecido en la Clase N° II de la Tabla 12.4.5 del Decreto 917 de 1999, que permite una calificación de esta deficiencia de hasta el 20%, pues según la historia clínica de la demandante, la señora COLORADO QUIROZ presenta ánimo triste, apatía, anhedonia irritabilidad, y llanto facial, desde la operación de rodilla que le había sido practicada en el mes de julio de 2013, es decir, su trastorno depresivo superaba los 6 meses de duración.

Corolario de lo anterior, estima la Sala que los porcentajes asignados por la IPS UINIVERSITARIA para calificar las deficiencias que padece la actora se encuentran acordes a los valores establecidos en las Tablas 3.3 y 12.4.5 del Manual Único de Calificación de Invalidez – Decreto 917 de 1999, y por ello, debe concluirse necesariamente que la señora EMILSE DEL SOCORRO COLORADO QUIROZ, si presenta una pérdida de capacidad laboral del **55,72%**, derivada de una enfermedad de origen común.

En cuanto a la fecha de estructuración del estado de invalidez acogida por la IPS UNIVERSITARIA, esto es, el día **12 de agosto de 2014**, observa la Sala, que la misma si se encuentra sustentada en la HISTORIA CLÍNICA de la señora COLORADO QUIROZ, según consta en el expediente administrativo aportado en medio magnético visible a folios 127 del expediente, el cual corresponde, a una evaluación médica realizada a la demandante en el INSTITUTO COLOMBIANO DEL DOLOR el día 12 de agosto de 2014, donde la actora, refiere haber tenido mejoría clínica después del procedimiento denominado bloqueo de nervio safeno izquierdo guiado por ecografía, pero que aún así, obstante continua con dolor cuando camina.

Para la IPS UNIVERSITARIA, esta es la fecha de estructuración de la invalidez, pues fue el momento en que la actora perdió su capacidad laboral en forma permanente y definitiva, es decir, sin posibilidad de recuperación, debido a la evolución de las secuelas provocadas por sus patologías, y dado que la misma se encuentra soportada en la historia clínica de la afiliada tal y como lo establece el art. 3 del Decreto 917 de 1999, se tendrá como cierta esta fecha de declaratoria de la invalidez.

En cuanto a la validez del dictamen pericial realizado por el IPS UNIVERSITARIA, estima la Sala, que el mismo reúne todos y cada uno de los requisitos formales para su procedencia en los términos del art. 226 del Código General del Proceso, pues esta prueba además de haber sido realizada por una institución o profesional especializado, se mostro clara, precisa, exhaustiva y detallada, el perito compareció al proceso y explico a profundidad los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones, también manifestó en que consistía el error de las juntas medicas, esto es, la indebida aplicación de las tablas 3.3 y 12.4.5 del Manual Único de Calificación de la Invalidez. Y si bien con la demanda no se allegaron las certificaciones académicas referentes a la idoneidad profesional del medico evaluador, durante la audiencia de practica de pruebas, el perito anexo los documentos pertinentes, en todo caso la contraparte tuvo la oportunidad de controvertir el dictamen y pedir las explicaciones del caso al perito en la referida audiencia.

Y por ello era deber del juez de primer grado, valorar el dictamen realizado por la IPS UNIVERSITARIA de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso, tal y como lo ordena el art. 232 del CGP.

Motivos por los cuales, se revocará lo resuelto en este sentido, y se acogerá el dictamen de pérdida de capacidad laboral realizado por la IPS UNIVERSITARIA obrante a folios 21 al 25 del plenario, con el que acredita una perdida de capacidad laboral de la señora COLORADO QUIROZ igual o superior al 50%.

En cuanto al requisito de semanas cotizadas, observa la Sala que en la HISTORIA LABORAL de la demandante obrante a folios 41 al 46 del plenario expedida por COLPENSIONES, consta la existencia de 570,29 semanas cotizadas en toda la vida laboral, de las cuales 154 se encuentran cotizadas entre el 12 de agosto de 2011 y el 12 de agosto de 2014, esto es, en los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez,

resultando evidente la causación del derecho pensional en los términos de la Ley 860 de 2003.

Mesada pensional y retroactivo

Teniendo en cuenta que la historia laboral de la demandante no registra cotizaciones cuyo IBC sea superior al salario mínimo legal mensual vigente, y que el régimen de prima media con prestación definida no permite pensiones cuyo monto sea inferior al mínimo legal (arts. 35 y 40 de la Ley 100 de 1993), la Sala le otorgará a la demandante una pensión de invalidez en cuantía mínima a partir del 12 de agosto de 2014, y liquidada con base en 13 mesadas anuales, por haberse causado la pensión con posterioridad al 31 de julio de 2011, conforme lo señalado en el acto legislativo 01 de 2005.

También se advierte por parte de la Sala, que el presente asunto no operó la prescripción parcial de mesadas pensionales en los términos reglados por los arts. 488 del CST y 151 del CPTSS, toda vez que la reclamación administrativa ante COLPENSIONES, se agotó el día 13 de octubre de 2016 (fls.100), y la demanda ordinaria laboral que hoy nos ocupa, data del 29 de noviembre de 2016, según se aprecia a folios 18 del plenario, además en el sub lite tampoco esta probado que la demandante haya recibido el pago de incapacidades médicas desde la fecha de estructuración de su estado de invalidez y hasta la fecha en que se profiere esta sentencia, y por ende la pensión comenzará a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca el estado de invalidez, tal y como lo dispone el art. 40 de la Ley 100 de 1993.

En consecuencia, a título de retroactivo pensional por el periodo causado entre el 12 de agosto de 2014 y el 28 de febrero de 2021, incluida la mesada adicional de diciembre de cada anualidad, se adeuda la suma de **SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/L (\$64.547.998).**

Año	Valor Mesada	Mesadas	Subtotal
2014	\$ 616.000,00	5,63	\$ 3.468.080,00
2015	\$ 644.350,00	13	\$ 8.376.550,00
2016	\$ 689.454,00	13	\$ 8.962.902,00
2017	\$ 737.717,00	13	\$ 9.590.321,00
2018	\$ 781.242,00	13	\$ 10.156.146,00
2019	\$ 828.116,00	13	\$ 10.765.508,00
2020	\$ 877.803,00	13	\$ 11.411.439,00
2021	\$ 908.526,00	2	\$ 1.817.052,00
			\$ 64.547.998,00

A partir del 1° de marzo de 2021, la entidad demandada deberá continuar pagando a la demandante una mesada pensional en cuantía mensual de \$908.526, equivalente a un (1) SMLMV para el año 2021, sobre 13 mesadas anuales, y sin perjuicio de los incrementos que decrete el gobierno nacional.

Sobre el anterior retroactivo pensional, se autoriza a COLPENSIONES a deducir el porcentaje legal destinado al subsistema de salud, al ser esta una obligación legal de todo pensionado, conforme lo dispuesto en el art. 143 de la Ley 100 de 1993.

Intereses moratorios y/o indexación de las condenas.

Finamente en relación con la pretensión de intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, estima esta corporación que los mismos no están llamados a prosperar en el sub lite, dado que el porcentaje mínimo de invalidez requerido para causar el derecho a la pensión deprecada, apenas fue acreditado con la prueba pericial allegada y controvertida en el transcurso del proceso judicial, y por ello la declaratoria del derecho como tal, solamente le estaba conferida al administrador de justicia, y al ser ello así la pasiva tenía elementos de ley suficientes para negar el derecho pensional, razones por las que la Sala considera que en el caso planteado no hay lugar a condena a intereses moratorios, pues la entidad solo incurre en mora, si al momento de la solicitud pensional se acreditan con la solicitud pensional, y por ello de declarará probada la excepción de inexistencia de la obligación propuesta por la entidad demandada; sin embargo, se accederá a la INDEXACIÓN DE LAS CONDENAS, entendida esta como el mecanismo para, además de mantener el poder adquisitivo constante de las mesadas pensionales, subsanar el retardo de la entidad demandada en pagar la pensión de invalidez, indexación que debe

ser calculada por COLPENSIONES a partir del 12 de agosto de 2014, mes a mes y sobre cada una de las mesadas que componen el retroactivo pensional adeudado hasta el momento en que se produzca su pago efectivo, Para liquidar la indexación la pasiva tendrá en cuenta la siguiente formula:

$$\frac{\text{ÍNDICE FINAL}}{\text{ÍNDICE INICIAL}} \times \text{VALOR A INDEXAR} - \text{VALOR A INDEXAR}$$

No habiendo más motivos de inconformidad frente a la sentencia de primera instancia, la misma habrá de revocarse, para en su lugar declarar el derecho pensional a favor de la demandante.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la decisión proferida y la prosperidad del recurso de apelación formulado por el apoderado judicial de la demandante, las costas procesales en ambas instancias estarán a cargo de COLPENSIONES y a favor de la demandante, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1º del art. 365 del Código General del Proceso, en esta instancia, las agencias en derecho se fijan en la suma de \$908.526 equivalente a 1 SMLMV para el año 2021, las agencias en derecho en primera instancia, deberán ser recalculadas por el juzgado de origen, en atención a lo resuelto en esta instancia.

VIII - DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la **SALA TERCERA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR íntegramente la sentencia objeto de apelación de fecha y procedencia conocida, para en su lugar, **DECLARAR** que a la señora **EMILSE DEL SOCORRO COLORADO QUIROZ** identificada con cédula de ciudadanía N° 39.167.650 le asiste derecho a una pensión de invalidez de origen común, a cargo de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**, por haber acreditado los requisitos legales contenidos en los arts. 38 y 39 de la Ley 100 de 1993, modificados por la Ley 860 de 2003, según lo expuesto en precedencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, se **CONDENA** a **COLPENSIONES** a reconocer y pagar a la señora **EMILSE DEL SOCORRO COLORADO QUIROZ**, una pensión de invalidez de origen común a partir del 12 de agosto de 2014, cuyo retroactivo pensional liquidado hasta el 28 de febrero de 2021, asciende a la suma de **SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/L (\$64.547.998)**, mesadas que deberán ser indexadas meses a mes a partir del 12 de agosto de 2014, y hasta al momento en que se efectuó el pago, declarándose probada la excepción de inexistencia de la obligación frente a la condena por intereses moratorios, según lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.


A partir del 1º de marzo de 2021, **COLPENSIONES** deberá continuar pagando a la demandante una mesada pensional en cuantía mensual de \$908.526, sobre 13 mesadas anuales, sin perjuicio de los incrementos que decreta el gobierno nacional.


TERCERO: AUTORIZAR a **COLPENSIONES** a descontar del retroactivo adeudado el porcentaje legal por concepto de aporte obligatorio destinado al subsistema de salud, según lo expuesto en precedencia.


CUARTO: COSTAS en ambas instancias a cargo de COLPENSIONES y a favor de la demandante, en esta instancia las agencias en derecho se fijan en la suma de \$908.526, equivalente a 1 SMLMV para el año 2021, las agencias en derecho de primera instancia, deberán ser reliquidadas por el juzgado de origen.

QUINTO: Se ordena la notificación por **ESTADOS** de esta providencia, la devolución del proceso al juzgado de origen y se autoriza su reproducción virtual a las partes del proceso.

Los Magistrados:


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° 054 del 5 de abril de 2021.

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>